

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

INE/JGE219/2023

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/RI/SPEN/48/2023, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR
[REDACTED]

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2023.

VISTOS, los autos que integran el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente **INE/RI/SPEN/48/2023**, formado con motivo del escrito de [REDACTED], por el que impugnó la resolución emitida en el Procedimiento Laboral Sancionador [REDACTED].

G L O S A R I O

Actora, promovente, recurrente	[REDACTED]
Autoridad Instructora	Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
Autoridad Resolutora/Secretario Ejecutivo	Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
[REDACTED]	[REDACTED]
Estatuto	Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral.
JGE, Junta	Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
PLS/procedimiento	Procedimiento Laboral Sancionador [REDACTED].
Protocolo	Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

	Nacional Electoral.
Sala Regional	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey.

A N T E C E D E N T E S

- I. **Renuncia.** El 31 de mayo de 2021, la recurrente renunció al cargo de [REDACTED]
- II. **Denuncia.** El 6 de junio siguiente, la parte actora, presentó una denuncia por correo electrónico al buzón HASL en contra del [REDACTED].
- III. **Diligencias de investigación.** El 25 de julio de 2021, la autoridad instructora ordenó dar vista a la Subdirección de Investigación, para que llevara a cabo la investigación correspondiente.

Luego, en esa misma fecha, mediante oficio INE/DJ/7213/2021 dicha autoridad requirió informes al secretario de la [REDACTED]

Después, los días 27, 29 y 30 de julio de 2021, la autoridad instructora convocó a los testigos que ofreció la recurrente, a fin de desahogar las comparecencias respectivas, relacionadas con la investigación del PLS.

- IV. **Auto de no inicio de PLS.** El 3 de enero de 2022, la autoridad instructora emitió auto, en el que por un lado determinó iniciar Procedimiento Laboral Sancionador en contra del [REDACTED] por considerar que existían elementos para ello; y por otro, el no inicio del PLS en contra de la [REDACTED].

Dicho auto se notificó a la recurrente el 1 de febrero de 2022.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

- V. Recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/08/2022.** Inconforme con la determinación anterior, el 11 de febrero de 2022, la promovente mediante correo electrónico, presentó escrito de impugnación en contra del no inicio del PLS.
- VI. Informe psicológico.** El 3 de marzo de 2022, la Subdirección de Atención Integral y Sensibilización de la autoridad instructora, emitió el informe psicológico de la promovente.
- VII. Resolución del recurso INE/RI/SPEN/08/2022.** El 26 de mayo de 2022, esta Junta resolvió el recurso de inconformidad, en el sentido siguiente:

*“PRIMERO. SE CONFIRMA el acto reclamado en los términos precisados en la presente resolución.
(...)”*

- VIII. Primer juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.** En contra de esa determinación el 13 de junio de 2022, la recurrente presentó un escrito, el cual mediante Acuerdo Plenario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ordenó reencauzarlo a la Sala Regional, al ser autoridad competente para su resolución.

El 15 de julio de 2022, en el expediente SM-JE-49/2022 la Sala Regional revocó la resolución dictada en el recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/08/2022.

- IX. Segundas diligencias de investigación.** En atención a lo ordenado por la Sala Regional, mediante acuerdo de 20 de julio de 2022, la autoridad instructora ordenó a la Subdirección de Investigación, que realizara las acciones correspondientes para dar cumplimiento.

Por lo anterior, para allegarse de mayores elementos de convicción los días 21 de julio, 25 de agosto, 1 y 5 de septiembre de 2022, la autoridad instructora, requirió informes, respectivamente, a la [REDACTED]

[REDACTED]

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

X. Segunda determinación de no inicio del PLS. El 9 de septiembre de 2022, la autoridad instructora dictó auto de **no inicio** del PLS, respecto de las conductas atribuidas a la [REDACTED].

XI. Inicio del procedimiento. El 30 de septiembre de 2022, la Sala Regional mediante Acuerdo Plenario, determinó el no cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente SM-JE-49/2022, al considerar que el no inicio del procedimiento fue contrario a lo que se ordenó, ya que se había establecido que existían indicios suficientes para iniciar el PLS correspondiente.

En cumplimiento, la autoridad instructora dictó el 4 de noviembre siguiente, el auto de inicio del PLS en contra de la [REDACTED]

XII. Integración del expediente PLS. El 24 de noviembre 2022, la [REDACTED], mediante oficio [REDACTED], remitió a la autoridad instructora, escrito de contestación y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.

El 2 de diciembre de ese año, la autoridad instructora dictó auto de admisión de pruebas, en el que tuvo por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cargo y descargo, y determinó lo conducente para el desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la [REDACTED].

El 29 de marzo de 2023, la autoridad instructora emitió el auto de término para alegatos, en el que ordenó agregar al expediente la documentación electrónica remitida por la denunciante y [REDACTED].

XIII. Cierre de instrucción del procedimiento. El 8 de mayo de 2023, al no haber diligencias pendientes por realizar, la autoridad instructora determinó el cierre de instrucción en el PLS para que se formulara la resolución que en derecho correspondiera.

XIV. Resolución impugnada. El 23 de junio de 2023, la Secretaría Ejecutiva resolvió el PLS, en los términos siguientes:

*“PRIMERO. No se acredita la conducta atribuida a la probable infractora dispuesta en el artículo 72, fracciones XXVI y XXVIII del Estatuto, por lo que en consecuencia se **ABSUELVE** a la denunciada de las conductas imputadas
...”*

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

XV. Segundo juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Presentación del Juicio Electoral. En contra de esa determinación, el 30 de junio siguiente, la parte actora promovió juicio electoral.

El 24 de julio de 2023, mediante Acuerdo Plenario, la Sala Superior determinó reencauzar al INE, el medio de impugnación para su estudio por la vía del recurso de inconformidad.

XVI. Turno. Mediante acuerdo de 27 de julio de este año, la Dirección Jurídica del Instituto, ordenó formar el expediente respectivo; registrarlo con la clave **INE/RI/SPEN/48/2023** y turnarlo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, como órgano encargado de elaborar el proyecto de auto de admisión, de desechamiento o, en su caso, el proyecto de resolución que en derecho corresponda, a efecto de someterlo a consideración de la Junta.

XVII. Acuerdo de admisión. Mediante proveído de 7 de diciembre de 2023, se admitió el recurso de inconformidad presentado por la promovente y al no existir algún elemento de prueba por desahogar, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 368 del Estatuto.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Esta Junta es competente para conocer del presente asunto, conforme con lo determinado por la Sala Superior, al ser la instancia administrativa jerárquicamente superior a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en aras de brindar acceso a la justicia conforme se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que previo a acudir a una instancia jurisdiccional, las y los promoventes tienen derecho a una instancia administrativa que tenga como objetivo la revisión de los actos controvertidos, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o confirmar el acto impugnado.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Por tanto, es procedente el estudio del escrito de demanda mediante el recurso de inconformidad, en atención a lo sostenido por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que con ello se garantiza a la recurrente el acceso a la justicia.

Además, conforme con lo establecido por los artículos 48, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 360, fracción I, del Estatuto; 52, párrafos 1 y 2 de los Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad; y 40, párrafo 1, inciso o) del Reglamento Interior, al tratarse de un medio de impugnación en el que se controvierte una resolución emitida por la Secretaría Ejecutiva que puso fin a un PLS, la vía idónea es la del recurso de inconformidad.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El recurso de inconformidad reúne los requisitos para su procedencia previstos en los artículos 361 párrafo primero y 365 del Estatuto, en razón de lo siguiente.

Oportunidad. Se advierte que la resolución impugnada, fue notificada a la recurrente el 27 de junio de 2023 y el escrito se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto el 30 de junio del año en curso, mismo que fue reencauzado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a este Instituto para su estudio y resolución como ha quedado establecido en el apartado de Antecedentes; por lo que, se promovió dentro del plazo de 10 días hábiles que establece el Estatuto, el cual transcurrió del 28 de junio al 11 de julio del 2023, considerando que los días 1, 2, 8 y 9 de julio del año en curso fueron inhábiles al tratarse de sábados y domingos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 279 del Estatuto.

Forma y legitimación. En el escrito, se hizo constar el nombre completo de la parte recurrente, así como su domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones; se manifiestan los agravios, se aportan pruebas y se asienta la firma autógrafa de la inconforme, la cual al tratarse de la persona que presentó la denuncia en el PLS y al considerar que le causa perjuicio la determinación, es que se encuentra legitimada.

Asimismo, destaca que no se actualiza ninguno de los supuestos señalados en el artículo 364 del Estatuto, y contiene los elementos señalados en los artículos 361 y 365 del citado ordenamiento, por lo cual es procedente.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

TERCERO. Agravios. Previo al estudio de fondo del presente recurso, es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Estatuto, el escrito mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener, entre otros, los agravios, los argumentos de derecho en contra de la resolución que se recurre y el señalamiento de las pruebas que se ofrezcan.

En su escrito, la recurrente sustancialmente sostiene:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CUARTO. Fijación de la litis. La litis en el presente asunto, se constriñe a determinar si, como lo asegura la recurrente, la autoridad resolutora, emitió la resolución en el PLS sin analizar de manera exhaustiva los hechos y las pruebas que obraban en el expediente, que indebidamente se dilató el inicio del PLS; aunado a que, no se juzgó con una perspectiva de género, por lo que fue incorrecto que se hubiera absuelto a la [REDACTED] conductas que denunció.

QUINTO. Estudio de fondo. Es importante señalar que los motivos de disenso de la parte actora se analizan mediante una perspectiva de género con la que se busca

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

positivar los principios de universalidad y progresividad consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se emplea una interpretación más favorable a los derechos humanos posiblemente afectados, a fin de lograr su restauración y protección en el futuro.

Conforme con ello, se utiliza la suplencia de la queja deficiente, con lo que se libran los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e incluso, inoportunidades en que pudiera haber incurrido la inconforme. Con tal instrumento se revela la naturaleza proteccionista de los medios de impugnación.

Al respecto, sirve de criterio orientador la jurisprudencia **IV.2o.A. J/6 (10a.)**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011. A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al juicio de amparo y por virtud de ellos los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja deficiente encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de ella el Juez puede analizar por sí una

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

violación no aducida y conceder el amparo, librando en ese proceder los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera que es la suplencia el instrumento que mejor revela la naturaleza proteccionista del amparo, y su importancia, como mecanismo de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la expulsión de aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las reformas comentadas posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de un juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que afecta los derechos fundamentales del quejoso, podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la no impugnación o la impugnación inoportuna del acto inconstitucional, su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos rigorismos, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del principio de primacía constitucional en la forma más amplia. Además, tal proceder es congruente con la intención inicial reconocida a la suplencia de la queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional, en tanto que las deficiencias en que incurra el agraviado, relacionadas con la falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden entenderse como una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual debe ser liberado.

Ahora bien, la parte actora, refiere que le causa perjuicio la resolución impugnada, ya que viola sus derechos de acceso a la justicia y a un juicio justo, al debido proceso y a la debida diligencia, pues desde su perspectiva, hubo una dilación excesiva para poder acceder al PLS.

Refiere que se hizo un indebido análisis de los hechos y las pruebas que obran en autos, lo que resultó en una falta de exhaustividad en el actuar de la autoridad resolutora, toda vez que de haberse tomado en consideración los hechos atribuidos al [REDACTED], se hubieran acreditado las conductas denunciadas a la [REDACTED], ya que las pruebas eran suficientes para determinar que las actividades de ambos funcionarios estaban directamente vinculadas.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Luego, señala que la autoridad resolutora no actuó bajo una perspectiva de género, a lo cual está obligada conforme lo establece el Estatuto, además de que no se aplicó en su favor el Protocolo [REDACTED],

pues no se analizaron los hechos con la aplicación de las [REDACTED], lo que afectó la determinación de la autoridad resolutora por lo que incumplió con su función electoral, ya que vulneraron los principios de imparcialidad y objetividad.

Al respecto, como quedó asentado en el capítulo de Antecedentes, la recurrente promovió Juicio Electoral, en contra de la resolución de esta Junta del 11 de febrero de 2022 en el recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/8/2022, por lo que la Sala Regional en la sentencia identificada con la clave SM-JE-49/2022, determinó revocar la resolución impugnada, por lo que ordenó lo siguiente:

“5. EFECTOS

5.1. Se **revoca**, en la materia de impugnación, la resolución INE/JGE110/2022 emitida por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/08/2022.

5.2. En vía de consecuencia, **queda sin efectos** la parte del acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, dictado por el Director Jurídico del citado Instituto en el expediente [REDACTED], en la que determinó no iniciar el procedimiento laboral sancionador en contra de [REDACTED].

5.3. Se **ordena** al Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral que, en **breve plazo**, emita un nuevo acuerdo en el expediente [REDACTED] en el que, a partir de lo destacado en esta sentencia, analice nuevamente las constancias que obran en autos en relación con la conducta probablemente infractora atribuida a [REDACTED] y, de no existir alguna otra causa que lleve a la conclusión de no inicio, instaure el procedimiento laboral sancionatorio en su contra.”

En cumplimiento a lo señalado, la autoridad instructora dictó el acuerdo el 4 de noviembre de 2022, con el que inició el PLS.

Posteriormente, el 24 de noviembre siguiente, mediante acuerdo plenario de la Sala Regional, se tuvo por **cumplida** la sentencia antes mencionada, al considerar que la autoridad instructora había iniciado el PLS conforme a lo ordenado en la ejecutoria.

Entonces de los hechos, se advierte que se dio inicio al PLS, en contra de la [REDACTED], por lo que, contrario a su señalamiento tal hecho no le deparó

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

perjuicio alguno a sus derechos de acceso a la justicia y a un juicio justo, al debido proceso y a la debida diligencia, pues en cumplimiento de la sentencia del Juicio Electoral, se colmó su pretensión en la fecha en que se emitió el acuerdo de inicio del PLS.

Por lo tanto, es **infundado** el agravio de la parte actora, dado que se encuentra demostrado, que la autoridad instructora acordó el inicio del PLS, en cuanto se recabaron los elementos necesarios para ello y en acatamiento a lo señalado por la Sala Regional, por lo que, se atendió su pretensión de instaurar un procedimiento en contra de la [REDACTED], el cual se siguió en todas sus etapas, y en el que se emitió el 23 de junio de 2023, la resolución atinente, que es el acto que ahora se controvierte.

Por otro lado, en lo referente a que la resolución controvertida carece de exhaustividad al haberse llegado a la conclusión de que no se acreditaron las conductas denunciadas, pues desde su perspectiva no se analizaron los hechos y las pruebas aportadas, aunado a que la autoridad resolutora debió tomar en consideración que las acciones llevadas a cabo por el [REDACTED], estaban intrínsecamente relacionadas a la [REDACTED], al ser ella su superior jerárquica.

El agravio se desestima porque, la recurrente omite establecer de qué manera el hecho de que las conductas pudieran estar relacionadas es una causa suficiente para tener por acreditadas las conductas objeto del presente asunto, máxime que en la resolución impugnada, se hizo un análisis de todas las pruebas que fueron ofrecidas por las partes del PLS, además de las que recabó la autoridad instructora conforme con sus facultades de investigación; aunado a que, se analizaron las que obraban en el expediente del asunto instaurado en contra del [REDACTED].

En efecto, en la resolución impugnada se evidencia un análisis minucioso y completo de las pruebas que fueron ofrecidas por la recurrente, así como de las que se recabaron a partir de los informes que se requirieron a diferentes autoridades del Instituto relacionadas con los actos denunciados; así mismo, consta que se desahogaron las testimoniales que se ofrecieron por la parte actora y las que se obtuvieron, como parte del cumplimiento de la sentencia SM-JE-49/2023 de la Sala Regional, las cuales fueron estudiadas en conjunto con las ofrecidas por la [REDACTED] en su informe y en su escrito de alegatos.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Lo anterior, se verifica en los apartados de pruebas y estudio de fondo de la resolución impugnada, en los que de manera clara y evidente, se describieron cada una de las medios probatorios tanto los ofrecidas por las partes, como los recabados por la autoridad instructora, los que fueron que en el momento procesal correspondiente, adminiculados y analizados por la autoridad resolutora; y mediante su estudio exhaustivo se determinó que eran insuficientes para tener por demostrados lo hechos denunciados

Además, se desprende que la autoridad resolutora tomó en consideración, todas las constancias que obraban en el expediente formado a partir de las conductas atribuidas al [REDACTED], ya que integró de manera completa el expediente del PLS, tan es así, que en todo momento se hizo referencia de las actividades que desarrolló el citado [REDACTED], conforme con los señalamientos de la recurrente respecto de los que denunció de la [REDACTED].

De tal manera, que como se plasmó en la resolución del PLS aun al considerar las acciones realizadas por el otro denunciado desde una óptica proteccionista en favor de la recurrente, no se acreditó una afectación a sus derechos, aunado a que no fue posible probar una falta de cuidado por parte de la [REDACTED], ya que los actos que se le atribuyeron al [REDACTED], se refirieron a las actividades laborales que desarrollaba en el ejercicio del cargo y en seguimiento de las actividades de la parte actora cuando se desempeñaba como [REDACTED], los que se referían a requerimientos que se formularon similarmente a las demás personas titulares de las juntas distritales ejecutivas, lo que de ninguna manera puede atribuirse como un indebido actuar por parte de la [REDACTED].

Por lo tanto, debe calificarse como **infundado** el agravio en estudio, pues contrario a lo señalado por la recurrente de las constancias que obran en autos, se desprende que, en el momento procesal correspondiente, se le otorgó la posibilidad de ofrecer pruebas y de presentarlas; las que fueron analizadas por la autoridad resolutora, dado que llevó a cabo un análisis completo de las pruebas y hechos correspondientes, así como de las conductas que le habían sido atribuidas al [REDACTED], con relación a las conductas que se habían denunciado de la [REDACTED].

De los hechos y pruebas que se analizaron por la autoridad resolutora, no se encontraron elementos que evidenciaran barreras u obstáculos para que se le otorgara un trato en igualdad de condiciones, o que la hubieran puesto en

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

desventaja por cuestiones de [REDACTED] incluso se determinó que en la asignación de actividades no se generó [REDACTED]. Asimismo, tampoco se advirtieron elementos, durante la investigación, que denotaran [REDACTED] que hubieran obstaculizado el acceso a la justicia de la recurrente, ya que se le brindó un trato en igualdad de condiciones.

Ello, al desprenderse de las constancias que obran en autos, que las actividades que le eran solicitadas a la recurrente, a su vez, le eran requeridas a las demás [REDACTED], sin que de las mismas se advirtiera algún elemento diferenciado hacía la parte actora que resultara en un hecho [REDACTED], dado que quedó demostrado se encontraban encaminadas al seguimiento de las tareas concernientes al cargo que desempeñaba.

Además, de que tanto en la sustanciación del PLS, como en la resolución, con base en la obligación de juzgar con perspectiva de género; a favor de la accionante se logró eliminar cualquier obstáculo o diferencia que pudiera surgir en el transcurso de la investigación o en la etapa de resolución, tal y como se advierte del apartado de antecedentes y estudio de fondo de la resolución impugnada, en donde se especifican las acciones encaminadas a fin de brindar un manto protector a la actora.

Ahora, en lo relativo a que la autoridad resolutora no actuó bajo una perspectiva de género, dado que no aplicó el Protocolo, y que en similares términos, el asunto no se juzgó bajo la perspectiva de las [REDACTED], lo que generó un incumplimiento a la función electoral, por lo que hubo una vulneración a los principios de imparcialidad y objetividad.

Al respecto, debe considerarse que, contrario a lo que aduce la promovente, si hubo un análisis de las conductas denunciadas bajo una perspectiva de género y de duda razonable, ya que tanto la autoridad instructora como la resolutora, tuvieron un actuar proteccionista hacia la parte actora, respecto al asunto y los hechos que se hicieron de su conocimiento, por las cuestiones que se razonan a continuación.

De autos, se advierte que desde la presentación de la denuncia, se llevaron a cabo actividades para proteger la integridad de la recurrente, pues consta que se le brindó atención psicológica para que, en caso de afectación se diera seguimiento profesional por las áreas competentes del Instituto, a fin de que tuviera garantizado

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

un procedimiento en el que se evitara su revictimización, y que en su caso, se siguieran efectuando posibles actos de violencia.

Lo anterior, se encuentra probado con las medidas de protección en favor de la promovente, como lo fue la primera entrevista donde se le brindó atención especializada de la Dirección de Asuntos HASL, para que tuviera un acompañamiento continuo en el desarrollo del PLS, además de la orientación jurídica con relación a su asunto y las demás alternativas legales a las que podía acceder.

Luego, en aras de alcanzar un equilibrio entre las partes, se brindó a la recurrente, el apoyo de una persona especializada en el desahogo de las audiencias testimoniales, atendiendo su solicitud, para que tuviera acceso a una asesoría adecuada ante el desarrollo de dicha etapa del procedimiento.

Por otra parte, en la resolución impugnada, se analizaron los hechos denunciados conforme lo establece el Protocolo, que establece las directrices para resolver desde una perspectiva de género las controversias que son puestas a consideración de la autoridad resolutora con objeto de que se eliminen las diferencias que existen entre las partes, tal y como se constata de la lectura de la resolución impugnada.

También, como se advierte de la resolución reclamada, la autoridad resolutora, realizó el análisis con base en las [REDACTED] la recurrente, por lo que estableció las acciones que conforme al Protocolo debían atenderse en virtud de la posible violación a los derechos de la persona ahora recurrente, al considerar las implicaciones que tiene [REDACTED].

A partir de esa perspectiva, se determinaron las relaciones entre las partes y si tal circunstancia, implicó una posible vulneración por cuestiones de poder o contexto de desigualdad basada en el [REDACTED], lo que generó un equilibrio en el proceso, por lo que se juzgó en un contexto de paridad de oportunidades, en el que se analizaron bajo esa perspectiva los hechos y las pruebas que obraban en el expediente, lo cual, se reforzó, por la autoridad instructora, al haberse allegado de mayores elementos de convicción con objeto de corroborar las conductas denunciadas.

Por tanto, es evidente que se le garantizó un procedimiento en el que se le otorgó acceso a la justicia como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Mexicanos y los tratados internacionales. Lo que quedó señalado en la resolución reclamada al tratarse de una denuncia [REDACTED].

En ese contexto, en el expediente se advierte que la autoridad resolutora, llevó a cabo un análisis bajo una perspectiva de género de las pruebas aportadas por la recurrente, así como de la totalidad de las constancias que obraban en autos, lo cual aun con tal perspectiva, fue insuficiente para acreditar las conductas denunciadas en el PLS, pues se comprobó que en ningún momento se generó un contexto de desigualdad por cuestiones de [REDACTED], ya que las acciones que eran realizadas por el [REDACTED], que en ocasiones eran hechas de conocimiento de la [REDACTED], se llevaban a cabo por las cargas laborales y en seguimiento de las actividades encomendadas a todas las juntas distritales ejecutivas en el estado de [REDACTED].

Lo que se adminiculó con las declaraciones de las demás vocalías ejecutivas distritales de las que se concluyó que se les enviaron instrucciones de trabajo similares; las que les fueron requeridas, sin que hubiera distinción o cargas excesivas a la parte actora por cuestiones de género, de tal manera, que aunque existía la presunción de que hubiera un trato diferenciado hacia la recurrente, esto no se acreditó, pues contrario a su dicho, se demostró que las actividades eran meramente concernientes a las actividades de la Junta Distrital Ejecutiva a su cargo en el proceso electoral federal, por lo que tampoco se acreditó que operara alguna duda razonable a su favor, respecto de los hechos que denunció.

En consecuencia, es **infundado** el agravio esgrimido por la recurrente, toda vez que se encuentra demostrado que la autoridad resolutora, actuó bajo una perspectiva de género, por lo que se le brindó la mayor protección en el análisis de los hechos denunciados, lo que evidencia el cumplimiento constitucional que tienen las autoridades de juzgar con perspectiva de género, además que se encuentra demostrado que en ningún momento hubo una distinción en las cargas de trabajo entre las que se asignaron a la parte actora y las demás vocalías ejecutivas distritales en el estado de [REDACTED], por lo que no se acreditó un trato injusto basado en el [REDACTED].

Por otra parte, y a mayor abundamiento, respecto de las medidas de reparación que solicita la recurrente, relativas que debe ordenarse se le ofrezca una disculpa pública hacia su persona por parte del Instituto, con la finalidad de que se refrende el compromiso con los derechos humanos de las personas [REDACTED], así como, que, se ordene la implementaciones acciones con las que se desincentiven las

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

prácticas discriminatorias en contra de ese grupo vulnerable dentro del espacio laboral, y que se actúe bajo una perspectiva de género.

Cabe señalar que, como se ha evidenciado, las conductas irregulares que denunció en contra de la [REDACTED], no se tuvieron por acreditadas y por ende no dieron lugar a la emisión de una resolución que impusiera una sanción.

Por lo que, es menester precisar que, conforme con lo previsto en el artículo 15, numeral 4, de los Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad, el recurso de inconformidad, es el medio de defensa que puede interponer el personal del Instituto, para controvertir los acuerdos emitidos por la autoridad instructora y las resoluciones emitidas por la resolutora, que tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas.

Entonces, como se advierte, no se encuentra prevista, ninguna de las acciones de reparación que solicita la recurrente.

De lo que se tiene que, para estar en posibilidad de ordenar una posible reparación en su favor, en principio, debería estar normativamente prevista, aunado a que debería existir una determinación condenatoria, con la que se acreditara que hubo una afectación a sus derechos humanos; lo que en el caso, no se acreditó.

En efecto, conforme con lo previsto en el párrafo cuarto, del artículo 4 de la Ley General de Víctimas, la calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo, lo que se insiste, no se probó.

Lo anterior es así, porque del análisis del acto convertido, se desprende que la autoridad resolutora, sí analizó de manera exhaustiva los elementos que obraban en el expediente, además de se encuentra evidenciado que se eliminó cualquier obstáculo para el estudio correspondiente, de tal manera que se actuó desde una perspectiva de género, lo que a su vez, no fue suficiente para tener por acreditados los hechos denunciados y por consiguiente, se emitiera una resolución condenatoria, de ahí la imposibilidad de ordenar una medida de reparación del daño.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Por otro lado, en lo relativo a que la parte actora considera que el Instituto realiza actos de [REDACTED] y en consecuencia no actúa bajo una perspectiva de género,

En principio, se advierte que su argumento es genérico y sin soporte probatorio que lo sustente, ya que con independencia de que bajo su óptica no se juzgó con perspectiva de género por parte de la autoridad instructora y resolutora -hechos que no se acreditaron-, eso no implica que el Instituto realice actos de discriminación en contra de las [REDACTED], por lo cual, es menester señalar lo siguiente.

Contrario a lo establecido por la inconforme el INE respecto a temas de la [REDACTED], ha llevado a cabo mecanismos que han favorecido que la comunidad [REDACTED], en particular a las personas [REDACTED] para que puedan ejercer sus derechos político-electorales, como lo son el derecho al voto y a la participación en los procesos electorales, tanto como integrantes de las autoridades locales y distritales del Instituto, como para acceder a cargos de elección popular, lo que ha beneficiado a sus integrantes para hacerse escuchar, exigir sus derechos y expresar su voluntad, ello a partir de la aprobación y aplicación del Protocolo.

Asimismo, el Instituto desde su Comisión de Género, ha implementado acciones de investigación, aplicación y difusión para fomentar que la participación política se realice con igualdad de género, no discriminación y libre de violencia política, además de que cuenta con un Grupo de trabajo de igualdad y no discriminación, que tiene como objetivo fortalecer la colaboración y la comunicación entre los órganos administrativos que integran el Instituto, actividades que han sensibilizado a la comunidad para que se genere un ambiente de igualdad y no discriminación.

Un ejemplo de esos esfuerzos, fue la aprobación del Protocolo, que ha servido para la emisión de criterios orientadores y acciones específicas para propiciar que el Instituto siga siendo un espacio libre de discriminación, en el que la identidad y la expresión de [REDACTED] de las personas [REDACTED] que laboran y prestan sus servicios en él, se respeten lo que a su vez tiene un impacto específico en los siguientes parámetros:

“1. Establecer las acciones que se deberán seguir, al interior del Instituto, para la rectificación de datos y documentos institucionales de las personas [REDACTED] que laboran o prestan sus servicios en él.

2. Identificar actividades transversales para institucionalizar una cultura de respeto para las personas [REDACTED] que laboran y prestan sus servicios en el Instituto,

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

promoviendo medidas de inclusión y nivelación para eliminar los obstáculos que pudieran afectar sus derechos laborales.”

Así, el INE cumple con los objetivos para evitar que exista un ambiente laboral discriminatorio y que a su vez, da como resultado que las personas [REDACTED] puedan ejercer su derecho político-electoral de integrar las autoridades electorales.

Aunado a ello, con fundamento en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que tiene como principales ejes el incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

Para su observancia el Instituto ha adoptado de manera voluntaria prácticas a favor de sus trabajadores en la rama administrativa y en el Servicio Profesional Electoral Nacional con lo que se ha avanzado en crear un ambiente laboral sin discriminación, por lo cual, derivado de ese compromiso, el 17 de mayo de 2023, mediante acuerdo INE/JGE94/2023, la Junta General Ejecutiva aprobó la Política Laboral de Igualdad de Género y No Discriminación, que tiene como objetivo promover el derecho y el principio a la Igualdad y no discriminación; fortalecer la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito laboral; otorgar igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos laborales y humanos a todas las personas que laboran y prestan sus servicios en el INE, sin importar su apariencia física, su cultura, si tienen alguna discapacidad, su idioma, su sexo, su género, su edad, su condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, su estado civil, su religión, sus opiniones, su identificación o filiación partidista, su origen étnico o nacional, su orientación sexual, su identidad y/o expresión de género, sus características sexuales, su situación migratoria, o cualquier otra característica; generar espacios laborales libres de discriminación y violencia de género; lograr la armonización de la vida laboral, personal y familiar de quienes laboran en el Instituto, de manera que les sea posible desarrollarse plenamente en los ámbitos personal y profesional.

De tal manera, que contrario a lo señalado en su escrito de demanda, el Instituto ha implementado acciones en favor de la [REDACTED], las que se han ido maximizando paulatinamente-; consecuentemente, el motivo de disenso es **inatendible**.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Por otro lado, no debe pasar desapercibido que respecto a los señalamientos de la recurrente, relativos que no se analizaron los hechos atribuidos al [REDACTED] y que hubo una supuesta dilación excesiva para acceder al PLS; al respecto, es menester señalar que, la autoridad resolutora no tenía la obligación de revalorar los actos denunciados al [REDACTED], ya que se refieren a una persona diferente, de la funcionaria por la que se siguió la denuncia, cuya resolución se analiza en el presente asunto, que es la [REDACTED]; sin embargo, en aras de maximizar su derecho, bajo una perspectiva de género, contrario a su afirmación, consta que sí se tomaron en consideración los hechos que se atribuyeron al [REDACTED], no obstante ello, tales hechos que constan en diverso expediente fueron insuficientes para acreditar las conductas atribuidas a la denunciada.

Además, de que no hubo una dilación para que se accediera a un PLS, ya que en todo momento la autoridad instructora, actuó bajo sus facultades legales, que le permiten desde su perspectiva y de los elementos que obren autos, iniciar o no un Procedimiento Sancionador.

En conclusión, ante lo **infundados** e **inoperante** de los agravios hechos valer por la recurrente, con fundamento en el artículo 368 del Estatuto se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **confirma** la resolución de 23 de junio de 2023, dictada en el expediente [REDACTED], conforme con lo establecido en el considerando **Quinto** de la presente resolución.

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a la parte recurrente, por conducto de la Dirección Jurídica.

TERCERO. Para los efectos legales procedentes, a través de la Dirección Jurídica, hágase del conocimiento la presente resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por estrados a los demás interesados.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**

Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 11 de diciembre de 2023.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LA ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**LIC. MARÍA ELENA CORNEJO
ESPARZA**

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/48/2023
RECURSO DE INCONFORMIDAD**



Leyenda de clasificación de información reservada

Fecha de clasificación: 11 de diciembre de 2023.

Área responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Información clasificada como reservada (datos personales testados en el documento): Nombres cargos y adscripciones de la persona recurrente y de las personas denunciadas, materia de la litis y número de expediente del procedimiento laboral sancionador.

Periodo de clasificación: Reservada por un año.

Fundamento legal: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, fracción VIII: "Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada". Numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales: "De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada". Artículo 14, párrafo 1, fracción III del Reglamento del INE en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública: "Adicionalmente a la información considerada como reservada, de conformidad con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia, podrá clasificarse como reservada de acuerdo a las atribuciones del Instituto la siguiente: III. Los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especializado, en tanto no se haya emitido la resolución respectiva."

Motivación: Contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, en razón de que el probable infractor tiene derecho a no estar satisfecho con la resolución de la Junta General Ejecutiva y puede recurrir a la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todo lo cual lleva un proceso y hasta que la última instancia dicte la resolución final y la misma sea aplicada, el procedimiento causara estado. Si se desprotege la información se estaría afectando el honor y la imagen pública del probable infractor al darse a conocer la sanción y los motivos de la misma, cuando todavía no se ha emitido ni aplicado la resolución definitiva.

Fecha de desclasificación: 11 de diciembre de 2024.